

JUICIOS ELECTORALES

EXPEDIENTES: SM-JE-43/2023 Y SM-JE-44/2023, ACUMULADOS

PARTE ACTORA: MAYRA ALEJANDRA MORALES MARISCAL Y GLEN ALAN VILLARREAL ZAMBRANO

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TERCERA INTERESADA: AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

SECRETARIA: KAREN ANDREA GIL ALONSO

Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el expediente JE-005/2023 y acumulado JE-006/2023, ante la ineficacia de los agravios que las personas actoras hacen valer ante esta Sala Regional, pues las demandas se tratan de una reiteración de las que presentaron ante la instancia local, con lo cual omiten controvertir de manera frontal las consideraciones que sostuvo el tribunal responsable para confirmar el acuerdo de medidas cautelares y orden de protección dictado en el procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la denuncia presentada por una diputada local en contra de las personas promoventes, por la presunta comisión de violencia política por razón de género.

ÍNDICE

GLOSARIO	1
1. ANTECEDENTES DEL CASO	2
2. COMPETENCIA	3
3. ACUMULACIÓN	3
4. PROCEDENCIA	4
5. ESTUDIO DE FONDO.....	4
5.1. Materia de la controversia.....	4
5.2. Resolución impugnada	7
5.3. Planteamientos ante esta Sala Regional	8
5.4. Cuestión a resolver	10
5.5. Decisión	10
5.6. Justificación de la decisión	10
5.6.1. Son ineficaces, por reiterativos, los planteamientos formulados por las personas actoras	10
6. RESOLUTIVOS	16

GLOSARIO

Comisión de Quejas y Denuncias:	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León
Congreso Estatal:	Congreso del Estado de Nuevo León
Instituto Local:	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Tribunal Local:	Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
VPG:	Violencia política contra las mujeres en razón de género

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. **Denuncia.** El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés¹, Amparo Lilia Olivares Castañeda, diputada del *Congreso Estatal*, presentó una queja ante el *Instituto Local* en contra de Mayra Alejandra Morales Mariscal y Glen Alan Villarreal Zambrano, por la presunta comisión de *VPG* con motivo de diversas expresiones realizadas ante distintos medios de comunicación masiva y, a su vez, requirió el dictado de medidas cautelares.

La denuncia se radicó como procedimiento especial sancionador número PES-017/2023.

1.2. **Acuerdo de medida cautelar y orden de protección ACQYD-IEEPC-P-5/2023.** El cinco de junio, la *Comisión de Quejas y Denuncias* declaró procedente las medidas cautelares y orden de protección solicitadas por la denunciante en contra de quienes promueven.

1.3. **Juicio electoral JE-005/2023 y acumulado.** En desacuerdo, el catorce de junio, Mayra Alejandra Morales Mariscal y Glen Alan Villarreal Zambrano promovieron medios de defensa ante el *Tribunal Local*.

1.4. **Resolución impugnada.** El dos de agosto, el tribunal responsable confirmó las medidas cautelares y de protección dictadas por la *Comisión de Quejas y Denuncias*, al estimar que no eran desproporcionales y tampoco vulneraban los derechos de participación ciudadana y libertad de expresión de las personas actoras.

¹ En adelante todas las fechas corresponden al dos mil veintitrés.

1.5. Juicios federales. Inconformes con la determinación del *Tribunal Local*, el nueve de agosto, las personas actoras promovieron los siguientes medios de impugnación²:

No.	Expediente	Parte actora
1	SM-JE-43/2023	Mayra Alejandra Morales Mariscal
2	SM-JE-44/2023	Glen Alan Villarreal Zambrano]

1.6. Escrito de tercera interesada. El once de agosto, Amparo Lilia Olivares Castañeda presentó escrito para comparecer como tercera interesada en el juicio electoral SM-JE-43/2023.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes juicios, porque se controvierte una resolución relacionada el dictado de medidas cautelares en el trámite de un procedimiento especial sancionador, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 176, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación³.

3. ACUMULACIÓN

Al existir identidad en el órgano jurisdiccional responsable y en el acto reclamado, atendiendo al principio de economía procesal y con el fin de evitar el riesgo de que se dicten de sentencias contradictorias, procede decretar la acumulación del juicio **SM-JE-44/2023** al diverso **SM-JE-43/2023**, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos del expediente acumulado.

² Si bien, las personas promoventes expresamente señalaron que las demandas debían tramitarse como juicios de revisión constitucional electoral, mediante acuerdo de veintiuno de agosto, esta Sala Regional determinó encauzar sus impugnaciones para sustanciarlas y resolverlas como juicios electorales.

³ Aprobados el doce de noviembre de dos mil catorce, en los que, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la *Ley de Medios*, se determinó la integración de expedientes denominados Juicios Electorales, para conocer los planteamientos respectivos, los cuales deben tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios impugnativos que establece la legislación procesal electoral.

Lo anterior, de conformidad con los numerales 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la *Ley de Medios* y, 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. PROCEDENCIA

Los juicios reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, numeral 1, y 13, numeral 1, inciso b), de la *Ley de Medios*, conforme a lo razonado en los autos de admisión de veintidós de agosto.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Materia de la controversia

El veintinueve de mayo, Amparo Lilia Olivares Castañeda, en su carácter de diputada del *Congreso Estatal*, presentó queja en contra de las personas actoras por la posible comisión de *VPG* en su perjuicio, con motivo de diversas expresiones realizadas en una entrevista difundida por distintos medios de comunicación; a la par, solicitó el dictado de medidas cautelares y de protección.

Las expresiones que, en concepto de la denunciante, actualizaron la *VPG* ejercida por las personas actoras, se realizaron en el marco de la siguiente entrevista:

4

Hechos denunciados
Entrevista de 24 de mayo de 2023
<p>Mayra Alejandra Morales Mariscal: <i>Hoy estamos aquí presentes para presentar una denuncia en contra de la Diputada Amparo Olivares por las acciones que tuvo en el Congreso, que seguramente es de ustedes bien conocido en días anteriores, venimos hoy en nuestra calidad de ciudadanos y nicolaítas, pero también en mi calidad de Regidora para poder exigir, que personas como ella no nos puedan estar representando, es muy decepcionante ver como utiliza su cargo solamente para obedecer órdenes o indicaciones de un cacique de San Nicolás y no las necesidades e intereses de sus representados. Y definitivamente, es vergonzoso que mujeres como ella estén en esos cargos de poder para no poder, porque realmente no puede tomar ni siquiera ni una decisión.</i></p> <p>Persona entrevistadora: <i>Es concretamente por qué caso, en que se siente usted agraviada.</i></p> <p>Mayra Alejandra Morales Mariscal: <i>Donde votó por todos los demás diputados que, dicho sea de paso, es lo único que hacen en ese partido, ir a votar, y se agarró votando por todos como si no estuvieran, no estaban presentes mejor dicho y se agarró votando por todos, hay un video claro en él está, lo pueden encontrar en redes sociales, en YouTube y demás en la sesión del Congreso, porque las sesiones son en vivo donde vota aproximadamente por seis diputados.</i></p> <p>Persona entrevistadora: <i>¿Qué tema era el que votó?</i></p> <p>Mayra Alejandra Morales Mariscal: <i>Desconozco el tema, desafortunadamente no importa el tema que sea, insisto, al final que vote por los demás diputados es un claro acto de ilegalidad al reglamento del Congreso.</i></p>



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

Persona entrevistadora: Pero para hacer una denuncia debería de tener todo el contexto.

Mayra Alejandra Morales Mariscal: Sí, definitivamente, debería tener el contexto, aquí lo importante es saber ¿por qué lo hizo? Y ¿para qué lo hizo? Y ¿quién le dijo que lo hiciera?

Persona entrevistadora: Ok, Glen y ¿cuál es el, su presencia aquí, a qué obedece?

Glen Alan Villarreal Zambrano: Yo vengo acompañando a la Regidora, nosotros somos equipo en San Nicolás, como vecinos nicolaítas y hay que decirlo, esta denuncia **es importante porque es contra un miembro del clan del grupo San Nicolás. El grupo San Nicolás para los que no sepan es una mafia** que inició en dicho municipio y ha expandido sus operaciones en el resto de la entidad, han ido agarrando mucho poder, están aliados a la mafia del PRI, el capo de esta mafia, del grupo San Nicolás es Chefo Salgado y él está aliado con la mafia del PRI de Paco Cienfuegos.

Estas votaciones pues probablemente no deberían de valer, pero sabemos que no va a pasar nada, es la segunda vez que nos vemos, segunda semana consecutiva que nos vemos aquí en la Fiscalía Anticorrupción, y esta Fiscalía Anticorrupción es controlada por estas mismas mafias, las mafias del PRI y el PAN, controladas por los capos Chefo y Paco. Venimos aquí porque es nuestro deber como ciudadanos, pero, también para dejar registro de que las denuncias aquí en la Fiscalía Anticorrupción del Fiscal de acero que son contra el PRI, contra el PAN, contra los broncos, pues no pasa nada nunca, pueden estar congeladas años y años, creo que la vez pasada salió en algún reportaje que tenían valor de efectividad del 0.2% aquí en la Fiscalía Anticorrupción, Fiscal de Acero, ah pero que no sean denuncias contra cualquier trabajador de Nuevo León. Hoy por ejemplo en la mañana tuvieron audiencia trabajadores del SAT que fueron demandados por los municipios del PRI y el PAN, específicamente, la de hoy fue contra, fue Guadalupe, contra trabajadores empleados del SAT, de inspectores de tercero o cuarto nivel, y les están poniendo unas medidas cautelares de miedo, como si fueran criminales de alta peligrosidad pedidas por esta Fiscalía. La defensa solicitó que en el principio de publicidad constitucional dejaran entrar a los medios a estas audiencias y la Fiscalía se opuso y el municipio de Guadalupe también, porque hasta a ellos les da vergüenza la persecución política que esta mafia está haciendo contra los miembros, es ilegal las medidas cautelares que están haciendo son ilegales y aquí son parte, entonces esta denuncia es importante porque no está bien que un miembro del grupo de San Nicolás vote por todos los demás **porque pos ya se sabe que desde arriba les dicen cómo votar**, entonces para ellos da igual si vota uno por todos o votan todos cada quien lo suyo, pero aquí estamos, vamos a seguir dando la cara con la compañera Ale Morales y un servidor luchando por San Nicolás.

[...]

El cinco de junio, la *Comisión de Quejas y Denuncias* declaró la procedencia de las medidas cautelares y de protección en favor de la diputada denunciante al estimar, esencialmente que, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las personas promoventes ejercieron violencia simbólica, verbal y psicológica en contra de la citada legisladora.

Para arribar a dicha conclusión, la referida Comisión destacó que en la frase donde se señaló que la denunciante **utiliza su cargo solamente para obedecer órdenes o indicaciones de un cacique de San Nicolas**, se minimizó e invisibilizó a la diputada al afirmar que seguía órdenes de alguien más y no tomaba decisiones de acuerdo con su experiencia y conocimiento.

Mientras que, las expresiones por las que la actora indicó que **es vergonzoso que mujeres como ella** [la denunciante] **estén en esos cargos de poder para no poder**, afirmando que **realmente no puede tomar ni siquiera ni una decisión**, menoscaban y anulan el reconocimiento del ejercicio del cargo de la diputada, dejándola en estado de vulnerabilidad al desacreditarla como

servidora pública ante diversos medios de comunicación, restándole credibilidad ante la ciudadanía.

De igual forma, la *Comisión de Quejas y Denuncias* sostuvo que la frase empleada por el actor para indicar que ***ya se sabe que desde arriba les dicen cómo votar***, pretendía desacreditar las decisiones que toma la diputada denunciante en ejercicio de su cargo, interpretando que no actuaba según sus conocimientos y experiencia, sino bajo las indicaciones de alguien más.

Por lo anterior, la citada Comisión consideró, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que las manifestaciones denunciadas estaban basadas en estereotipos de género, que pretendían debilitar la imagen de las mujeres como líderes políticas eficaces y que, en esa medida, causaron un daño psicológico y emocional a la diputada, por lo que procedía el dictado de las medidas cautelares y de protección solicitadas por la denunciante.

En esa lógica, como **medida cautelar** ordenó a las personas promoventes que eliminaran de sus perfiles de redes sociales cualquier publicación relacionada con los hechos denunciados y, como **orden de protección**, prohibió a las personas actoras acercarse a la diputada denunciante, a su familia, a su domicilio y a su lugar de trabajo, así como realizar cualquier acción que vulnerara o menoscabara los derechos político-electorales de la referida legisladora.

Adicionalmente, se solicitó el auxilio del Instituto Estatal de las Mujeres para que brindara apoyo psicológico a la denunciante.

En desacuerdo con las medidas dictadas por la *Comisión de Quejas y Denuncias*, las personas actoras presentaron demandas ante el *Tribunal Local*, en las cuales, esencialmente, hicieron valer los siguientes motivos de disenso:

En su primer agravio, ambas personas promoventes sostuvieron que las medidas cautelares y de protección eran desproporcionales porque se vulneró su derecho de participación ciudadana y sus derechos de libertad de expresión, petición y garantía de audiencia derivado de la prohibición de acudir al lugar de trabajo de la diputada denunciante, al ser este el recinto oficial del *Congreso Estatal*.

Consideraron que esa limitación les imposibilitaba presentar peticiones, manifestar sus ideas o participar en actos políticos celebrados en el citado recinto, lo cual, en su concepto, impedía de forma desproporcional ejercer los

diversos instrumentos previstos en favor de la ciudadanía para la participación en la toma de decisiones de ese órgano legislativo.

En el segundo motivo de inconformidad, las personas actoras manifestaron que las medidas dictadas no eran acordes a los hechos denunciados y que, a través de éstas, se otorgaba impunidad a la diputada denunciante, convalidando los actos de corrupción que pudiera cometer y censurando a quienes la denunciaran.

A su vez, indicaron que las expresiones no se realizaron con la intención de demeritar a la legisladora por el hecho de ser mujer y que el acuerdo de medidas cautelares vulneró su derecho a la libertad de expresión.

De manera concreta, la promovente solicitó se juzgara a su favor, con perspectiva de género, por su carácter de mujer y denunciada; también que se valorara el contexto de los hechos, a fin de que no se le revictimizara.

Finalmente, el actor hizo valer un tercer agravio, en el cual agregó que existía una sistemática actuación de persecución y represión política en su contra, ejercida por el *Instituto Local* y otras autoridades estatales, al considerar que utilizaban las instituciones de impartición de justicia para brindarle un trato discriminatorio y falta de imparcialidad.

7

5.2. Resolución impugnada

El *Tribunal Local* confirmó el acuerdo de medidas cautelares y orden de protección emitido por la *Comisión de Quejas y Denuncias*, al determinar que no se vulneraron los derechos de participación ciudadana, libertad de expresión, petición y de audiencia de las personas promoventes.

Para arribar a esa determinación, en primer término, la autoridad responsable declaró infundado el agravio relativo a la desproporcionalidad de la medida consistente en prohibir a las personas promoventes su ingreso al recinto del *Congreso Estatal*, ya que, en su concepto, sus derechos de participación ciudadana estaban garantizados en todos y cada uno de los mecanismos contemplados en la ley de la materia, como consultas, asambleas, entre otros.

Además, indicó que la orden dictada tuvo como fin brindar a la denunciante protección en su calidad de víctima y con ello se evitó afectar su integridad, lo cual se ponderó sobre el derecho de las personas actoras de acudir a un recinto público, como lo es el *Congreso Estatal*.

De igual forma, el órgano jurisdiccional local sostuvo que el acuerdo de medidas cautelares estaba debidamente motivado, ya que se advertía, bajo la apariencia del buen derecho y de manera preliminar, que existían elementos suficientes para determinar la probable comisión de *VPG* en perjuicio de la denunciante, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción.

A su vez, el tribunal responsable señaló que la expresiones atribuidas a las personas promoventes no podían estar amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión e información, dado que podían constituir estereotipos y roles de género, ya que, a través de éstos se pretendía sostener que la diputada denunciante no toma decisiones por iniciativa propia, que sigue órdenes de otra persona, lo que genera un trato discriminatorio que la minimiza e invisibiliza; situación que, desde la visión jurídica del *Tribunal Local* constituye violencia simbólica que busca deslegitimar a las mujeres negándoles habilidades para la política.

Por otro lado, calificó de infundado el agravio hecho valer por la promovente al solicitar que se le juzgara con perspectiva de género y se evitara revictimizarla, en su calidad de mujer y denunciada, pues el órgano resolutor local consideró que, conforme al criterio de Sala Superior, para acreditar la *VPG* es intrascendental el sexo o género de la persona denunciada por cometer esa conducta, de modo que ésta también puede ser ejercida por mujeres contra otras mujeres.

Finalmente, determinó que no se acreditó la sistemática actuación de persecución y represión política ejercida por el *Instituto Local*, así como otras autoridades estatales en perjuicio del actor, ya que en autos del expediente no obraba prueba alguna que, aun de manera indiciaria, comprobara lo alegado.

5.3. Planteamientos ante esta Sala Regional

En desacuerdo con la decisión adoptada por el tribunal responsable, las personas actoras plantearon ante esta Sala Regional, los motivos de inconformidad que enseguida se detallan:

- a) Desproporcionalidad de la orden de protección.** Sostienen que les causa agravio la prohibición de acudir al lugar de trabajo de la diputada denunciante, ya que se trata del recinto del *Congreso Estatal*, con lo cual se les niega la posibilidad de presentar peticiones, manifestar sus ideas o participar en algún acto político a celebrarse en ese lugar.

Consideran que ello vulnera su derecho de participación ciudadana así como los derechos de libertad de expresión, petición y audiencia, ya que resulta necesario que les sea permitido participar en la actuación diaria de las instituciones públicas, como el Poder Legislativo, lo cual exige una intervención directa de la ciudadanía para la toma de decisiones a través de distintos mecanismos como asambleas ciudadanas, referéndums, consultas ciudadanas, presentaciones, reuniones de información y audiencia, iniciativas populares, contralorías sociales, llevadas a cabo, precisamente , en el recinto oficial del *Congreso Estatal*.

En esa medida, las personas promoventes señalan que *vale la pena considerar la justa opinión de la Magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos en la resolución*, en cuanto a que no se analizaron de manera congruente los agravios que hicieron valer, para lo cual reproducen parte del voto en contra que emitió la referida Magistrada Local.

b) Indebida apreciación de los hechos. Las personas actoras reiteran que las medidas impuestas son desproporcionales, ya que no son acordes a los hechos denunciados y *sacan de contexto* los comentarios que emitieron, con lo cual se otorga impunidad a la diputada denunciante, ya que, por el hecho de ser mujer, se convalida y justifica cualquier acto de corrupción que pudiera cometer, censurando a todo aquel que lo denuncie de manera pública.

También sostienen que no se tomó en consideración que las expresiones denunciadas no se realizaron con la intención de demeritar a la legisladora por razón de género, sino para evidenciar su actuar ilegal y coordinado por un grupo de poder.

Concretamente, la promovente señala que se debió valorar y resolver a su favor, juzgando con perspectiva de género, por ser mujer y denunciada; de manera que debe valorarse el contexto de lo ocurrido y evitar su revictimización, ya que incluso ella ha sido víctima de *VPG* por el grupo político que denunció.

En esa medida, reiteran que el *acuerdo impugnado* [sic] violentó su derecho a la libertad de expresión y blinda a una persona con cargo público que debe rendir cuentas a la población.

c) Persecución política. Por su parte, el actor agrega que le causa agravio la sistemática actuación de persecución y represión política que

ha ejercido el *Tribunal Local* y otras autoridades del Estado de Nuevo León, contra las que ha iniciado juicios mediante instancias diversas.

Señala que existen indicios suficientes para analizar el contexto de persecución política y que la autoridad responsable ha violentado injustificadamente sus derechos fundamentales de manera parcial y motivada por fuerzas políticas, por lo que solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada y se le libere de las prohibiciones impuestas.

5.4. Cuestión a resolver

Con base en los agravios expuestos, esta Sala Regional, como órgano revisor, debe analizar la legalidad de la resolución controvertida y determinar, sustancialmente:

- a) Si la prohibición impuesta a las personas actoras de ingresar al recinto del *Congreso Estatal* es una orden desproporcional de protección o no.
- b) Si las medidas cautelares y de protección son acordes a los hechos denunciados.
- c) Si existe la sistemática persecución política de la que se duele el accionante.

5.5. Decisión

En consideración de esta Sala Regional, debe **confirmarse** la resolución impugnada, ante la ineficacia de los argumentos expuestos por las personas promoventes, en tanto que se trata de una reiteración sustancial de los motivos de inconformidad expuestos en la instancia previa.

De manera que a este órgano revisor no le está dado realizar el análisis de los planteamientos de las personas actoras, ya que no controvierten frontalmente las consideraciones que sostuvo el tribunal responsable para determinar que el acuerdo de medidas cautelares y orden de protección dictado por la *Comisión de Quejas y Denuncias* no vulneró sus derechos de participación ciudadana, libertad de expresión, petición y audiencia.

5.6. Justificación de la decisión

5.6.1. Son ineficaces, por reiterativos, los planteamientos formulados por las personas actoras

En consideración de esta Sala Regional, son **ineficaces** los planteamientos de las personas promoventes porque omiten controvertir de manera frontal las razones que sostuvo el *Tribunal Local* para confirmar el acuerdo de medidas cautelares y orden de protección emitido por la *Comisión de Quejas y Denuncias*.

En la resolución controvertida, el tribunal responsable sostuvo que no se vulneraron los derechos de participación ciudadana, libertad de expresión, petición y audiencia de las personas actoras, ya que, aun con la prohibición de ingresar al *Congreso Estatal* que se les impuso, sus derechos estaban garantizados en todos y cada uno de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley de la materia.

De forma particular, consideró correcta la determinación de la *Comisión de Quejas y Denuncias*, porque de acuerdo con los artículos 14,17 y 64 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, los instrumentos jurídicos como la consulta popular, referéndums y revocación de mandato son presentados directamente ante el *Instituto Local*, por lo que no es necesario acudir a las instalaciones del *Congreso Estatal*.

De igual forma, por lo que hace a la consulta ciudadana, señaló que ésta es convocada por el Ejecutivo del Estado, *Congreso Estatal* o el ayuntamiento que corresponda, lo que significa que no se requiere la presencia de las personas promoventes en las instalaciones del poder legislativo local, al no ser sujetos legitimados por la norma para convocar a dicha consulta.

Respecto de la iniciativa popular, el tribunal responsable sostuvo que ésta puede ser presentada a nombre propio o en representación, de manera que tampoco resultaba indispensable que las personas actoras acudieran al órgano legislativo.

Similar tratamiento otorgó la autoridad responsable al referirse a las audiencias públicas, instrumentos de contraloría social, asambleas ciudadanas, en los que se destacó que no era necesario que las personas promoventes acudieran al recinto legislativo para ejercer su participación conforme a dichos instrumentos jurídicos; a la par que, tampoco demostraron que tuviesen presentaciones o reuniones próximas ante el *Congreso Estatal* y, de ser el caso, las podrían llevar a cabo por videoconferencia a través de diversas plataformas digitales.

Además, el *Tribunal Local* sostuvo que la orden dictada tuvo como finalidad brindar a la denunciante protección en su calidad de víctima y con ello evitar una afectación a su integridad, realizando una ponderación de esto frente al derecho de las personas actoras de acudir a un recinto público, como lo es el *Congreso Estatal*.

De igual forma, el órgano jurisdiccional resolutor determinó que el acuerdo de medidas cautelares estaba debidamente motivado, ya que se advertía, bajo la apariencia del buen derecho y de manera preliminar, que existían elementos suficientes para determinar la probable comisión de VPG en contra de la denunciante, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción denunciada.

El tribunal responsable concluyó que las expresiones atribuidas a las personas promoventes no podían estar amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión e información, dado que podían constituir estereotipos y roles de género, con los cuales se pretendía evidenciar que la diputada denunciante no toma decisiones por iniciativa propia, que sigue órdenes de otra persona, lo que genera un trato discriminatorio que la minimiza e invisibiliza. Aspectos que, desde la óptica del tribunal estatal, constituyen violencia simbólica que busca deslegitimar a las mujeres negándoles habilidades para la política.

12

A su vez, calificó de infundado el agravio hecho valer por la promovente al solicitar se resolviera a su favor y se evitara su revictimización en su carácter de mujer y denunciada, pues el tribunal responsable consideró que, conforme al criterio de Sala Superior, para acreditar la VPG es intrascendental el sexo o género de la persona denunciada por cometer esa conducta, de modo que ésta también puede ser ejercida por mujeres contra otras mujeres.

De igual forma, tuvo por no acreditada la sistemática actuación de persecución y represión política ejercida por el *Instituto Local*, así como otras autoridades estatales en perjuicio del actor, ya que en autos del expediente no obraba prueba alguna para que, aun de manera indiciaria, se comprobara lo alegado, aunado a que el accionante tampoco cumplió con la carga procesal de ofrecer medios de convicción pertinentes para demostrar los hechos que pretendía denunciar.

Como se observa del examen de las demandas, estas consideraciones no son controvertidas por las personas promoventes, ya que, en modo alguno refutan las razones dadas por el *Tribunal Local* para estimar que la prohibición de

ingreso al recinto legislativo no vulneró sus derechos de participación ciudadana.

Por el contrario, las personas actoras se limitan a reiterar sustancialmente los motivos de inconformidad expuestos en la instancia previa, de manera casi literal, como se corrobora de la confronta de los escritos presentados para el análisis del *Tribunal Local* y los que motivaron la integración de los juicios federales que se resuelven en esta sentencia.

Así, en consideración de este órgano de decisión, los planteamientos de la parte actora son **ineficaces**, pues se omite cuestionar de manera frontal y directa los razonamientos de la responsable, lo cual necesariamente debía ocurrir, para que esta Sala Regional estuviera en aptitud de pronunciarse.

Siendo que, en modo alguno, la reiteración de agravios y la sola mención de una presunta transgresión de ciertos derechos, como lo indican las personas inconformes, pudiera resultar suficiente para emprender un estudio oficioso de la legalidad de la resolución controvertida, sin referir por qué se estima que las consideraciones que sustentan la decisión del tribunal responsable resultan inexactas o contrarias a Derecho.

Al respecto, es criterio reiterado de este Tribunal Electoral⁴ que, para expresar agravios en un medio de impugnación en materia electoral, las personas promoventes deben exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Si ello no se cumple, los planteamientos serán desestimados por el órgano jurisdiccional sin realizar su análisis de fondo.

Este supuesto en general ocurre principalmente cuando se actualiza alguna o algunas de las siguientes hipótesis:

- a) Que se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las consideraciones del acto o resolución impugnada;
- b) Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir;
- c) Los conceptos de agravio se limiten a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación de origen, porque con esa repetición o abundamiento, en modo alguno se cuestionan frontalmente las consideraciones de la resolución o sentencia impugnada;

⁴ Véase la resolución dictada en los juicios SUP-JDC-48/2021, así como el SUP-JDC-124/2021.

- d) Si del estudio que se realice se llega a la conclusión de que un agravio es fundado, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones ese mismo concepto resulta no apto para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte actora, ese concepto, aunque fundado, debe declararse ineficaz; y,
- e) Si los motivos de queja que se hacen valer resultan novedosos; es decir, que los mismos no le fueron planteados a la autoridad responsable y, por ende, el órgano de control constitucional no debe tomarlos en cuenta pues de hacerlo, ello implicaría hacer una variación de la controversia de manera injustificada.

La Sala Superior ha sostenido⁵ que la actualización de los supuestos antes señalados trae consigo, como consecuencia directa, la calificación de ineficacia de los motivos de inconformidad por parte del órgano jurisdiccional, es decir, que estos no resulten aptos para cuestionar las consideraciones que sustentan acto o el sentido de la resolución impugnada, según sea el caso.

Es de clarificar que no se exige a quienes promueven plantear sus agravios bajo una formalidad específica, ya que, para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de la causa de pedir o un principio de agravio; sin embargo, ello implica, como presupuesto mínimo, que a través de ellos se confronte y cuestione lo determinado en la resolución controvertida⁶, lo cual no ocurre en el particular.

En este sentido, las personas actoras estaban obligadas a expresar con claridad las violaciones constitucionales o legales que considera fueron cometidas por el *Tribunal Local*, a fin de evidenciar que se realizó una incorrecta interpretación jurídica de las disposiciones aplicadas y que, en su caso, el acuerdo de medidas cautelares y la orden de protección decretadas que confirmó era indebido.

Ciertamente, los planteamientos formulados de esa manera resultan ineficaces dado que la controversia a resolver en esta instancia jurisdiccional federal debe definirse en torno a las consideraciones que sirvieron de base al

⁵ Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver, entre otros, los juicios ciudadanos SUP-JDC-210/2023 y SUP-JDC-264/2023.

⁶ Resulta aplicable la Jurisprudencia 3/2000: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR y 2/98 AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, publicada en *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Suplemento 4, año 2001, p. 5.

Tribunal Local para sostener el sentido de su decisión, en contraste con los argumentos que las partes actoras hacen valer en sus demandas, mediante los cuales evidencien, sin mayores tecnicismos, que la sentencia es contraria a Derecho, para estar en aptitud de analizar si les asiste razón o no. De otra forma, es decir, si se omite expresar mínimamente los motivos de queja que controviertan el fallo impugnado, deberá prevalecer el sentido de este, lo cual sucede en el caso al tratarse sólo de una repetición de las demandas locales.

Finalmente, se advierte que las personas actoras, al pretender evidenciar la desproporcionalidad de la prohibición de ingresar al recinto del *Congreso Estatal*, hacen referencia a lo expuesto en el voto particular formulado por una Magistratura Local, en el cual, esencialmente, sostuvo que la mayoría de los integrantes del tribunal responsable vulneraron el principio de congruencia, pues no se analizó si se restringían de manera injustificada los derechos de quienes promueven, transcribiendo para esos efectos parte del referido voto en contra.

Este planteamiento resulta de igual forma **ineficaz**, ya que las personas actoras incumplen con la carga procesal de exponer hechos y motivos de inconformidad propios que estimen vulneren sus derechos a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de confrontar esos agravios con las consideraciones de la resolución controvertida.

15

Resulta aplicable en lo conducente, lo previsto en la jurisprudencia 23/2016, titulada VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA MERA REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS⁷.

En ese mismo orden de ideas, deben **desestimarse** las alegaciones del actor, en cuanto a que existe una sistemática persecución política en su contra por parte del *Tribunal Local*, porque, se insiste, son una transcripción de lo hecho valer en la instancia previa, a excepción de la autoridad a la que le atribuye la presunta represión; además, se trata de argumentos genéricos en los cuales sólo se exponen una serie de precedentes, sin indicar de manera concreta los hechos y razones en los que sustenta su petición; aunado a que estos aspectos no forman parte de la controversia a dilucidar en los presentes juicios, la cual se limita a revisar la legalidad de la resolución por la que se confirmó el acuerdo de medidas cautelares.

⁷ Publicada en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, p.p. 48 y 49

En consecuencia, ante la ineficacia de los planteamientos que exponen las personas inconformes, por reiterativos y genéricos, lo procedente es **confirmar** la resolución dictada en el expediente JE-005/2023 y su acumulado JE-006/2023.

6. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el expediente del juicio electoral SM-JE-44/2023 al diverso SM-JE-43/2023.

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron por **unanimidad** de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasoch y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.